

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
Medellín, cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Exp. 003-2018-00587-03

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Quinta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- frente al auto que aprobó la liquidación de costas, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó en su contra LUZ MARIELA ESPINAL MONTOYA.

**ANTECEDENTES:**

En sentencia proferida el 19 de enero de 2021 el juez de primera instancia, atendiendo el contexto de la litis, ABSOLVIÓ a la demandada de la pretensión de pensión de sobrevivientes promovida, imponiendo las costas procesales a la parte demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

Esta decisión se confirmó en segunda instancia, sin imposición de costas procesales por conocimiento del trámite por el grado jurisdiccional de consulta.

Con estos referentes se aprobó la liquidación de costas por auto del 26 de septiembre de 2023 (Archivo 25), decisión frente a la cual la mandataria judicial de la parte demandada expresó su inconformidad, interponiendo recurso de reposición y en subsidio el de apelación, por considerar que para la tasación de las agencias en derecho debió acudirse a los criterios que tiene establecidos el Acuerdo PSAA10554 de 2016, aduciendo que el juzgado no tuvo en cuenta las tarifas mínimas y máximas allí establecidas, ni el valor fijado guarda armonía con la cuantía del proceso, la naturaleza de las pretensiones y los gastos en los que

se debió incurrir para la defensa del proceso, por lo que solicitó la modificación de las agencias en derecho ajustándolas a la realidad procesal.

El director del proceso por providencia que emitió el 13 de octubre de 2023 (Archivo 27), decidió no reponer el auto y concedió el recurso vertical.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES:

De cara a los antecedentes, el problema jurídico en esta ocasión se circunscribe a determinar si es plausible o no aumentar el monto de las agencias en derecho, incluidas en el auto que aprobó la liquidación de costas.

Pues bien, por sabido se tiene que, para la estimación de las agencias en derecho, debe acudirse a las tarifas fijadas por los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, pues a estos remite el numeral 4º del artículo 365 del CGP, aplicable a estos ritos por lo previsto en el 145 del CPTSS; dicha disposición que regula los parámetros para la liquidación concentrada de costas, señala que si en los referidos acuerdos se establece un mínimo, o éste y un máximo, para la movilidad entre uno u otro límite, *el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.*

El Acuerdo que aplica a este proceso es el PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, por razón de que la demanda se impulsó con posterioridad, el 12 de abril de 2018, mismo que en su artículo 5º regula la tarifa de las agencias en derecho de primera instancia para los procesos de mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido, disponiendo el rango de 1 a 10 SMLMV para aquellos asuntos que carezcan de cuantía o pretensiones pecuniarias sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

Vistas así las cosas, la Sala encuentra que en efecto el valor de \$100.000 no cumple los estándares del acuerdo, pero aunque es cierto e indiscutido que para la fijación de las agencias en derecho los falladores deben acogerse a las tarifas dentro de los rangos que allí se estipulan, también es verdad que debe mediar un ejercicio discrecional de ponderación, para que desde tales orientaciones se fije un monto que sea equitativo, razonable, prudente y proporcional, apreciando no solo la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, sino que debe ponerse de relieve la calidad de la parte vencida en juicio de cara a la contraparte, donde en este caso resalta la desproporción de los roles dentro del trámite y el sistema que no permite equipararlos, por lo que debe tomarse en consideración la naturaleza del proceso y la finalidad de la actuación desplegada, pero con miras a salvaguardar el principio de equidad, sin que deban olvidarse las bases de justicia para quien se vio obligado a demandar o a concurrir al proceso, no obstante que la razón no estaba de su parte, de ahí que el criterio equitativo debe constituirse también en un factor importante para evitar imposiciones que en este caso la solicitante no se encuentra en posibilidad de soportar.

Lo anterior, se suma a lo que expuso el órgano de cierre constitucional respecto a la condena en costas contemplada en los preceptos 365 y 366 del C.G.P: *"(...) La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe o siquiera culpable de la parte condenada. Sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas, como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaría de la condena incurrió en el proceso. Siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte. Ni pueden asumirse como una sanción en su contra. (...)"*.

De lo anterior se vislumbra que como las agencias en derecho las reconoce el juez discrecionalmente, sin que impliquen una condena de manera "*automática*" u "*objetiva*", se observa atinado incrementar el valor impuesto pero en \$580.000, en tanto se trató de un trámite que aunque tuvo una duración en la primera instancia que excedió los dos años, no se trató de un asunto en el que la apoderada de la

pasiva debiera asumir un esfuerzo jurídico superior, en cuyas etapas tuvo la intervención necesaria para dar respuesta a la demanda y agotar las audiencias de los artículos 77 y 80 del CPTSS, circunstancias que revelan que este valor se encuentra ajustado de cara a los criterios fijados, con coherencia y análisis de las particulares circunstancias del asunto concreto.

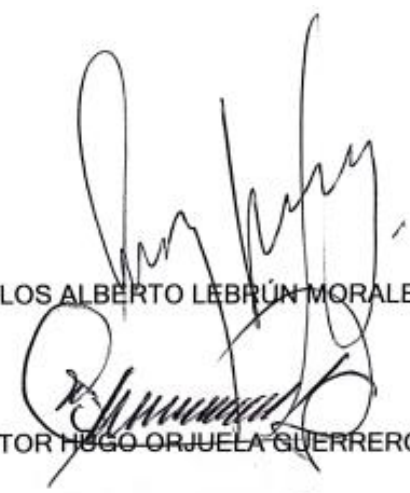
En consecuencia, conforme a estas breves pero precisas consideraciones y sin lugar a otras argumentaciones, se modificará el auto recurrido conforme a las antecedentes consideraciones.

#### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **MODIFICA** el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas, para imponer como agencias en derecho a cargo de la parte demandante la suma de \$580.000.

La presente decisión se notifica en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N°209 fijados el 5 de diciembre de 2023, en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El secretario.